

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, 1 de octubre de 2020

Auto Interlocutorio.

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA FEUILLET PALOMARES

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76-001-33-33-018-2017-00208-01
DEMANDANTE:	LEDA BETTY SIERRA BECERRA pavasierramyriam@hotmail.com
DEMANDADO:	UGPP info@iusveritas.com
ASUNTO	APELACIÓN DE AUTO – REVOCA

1. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procederá a resolver el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto interlocutorio nro. 378 del 07 de junio de 2019¹ proferido por el Juzgado 18 Administrativo Oral de Cali, que declaró probada de oficio la excepción de inexistencia del título ejecutivo y, en consecuencia, dio por terminado la la demanda ejecutiva instaurada por la señora Leda Betty Sierra Becerra contra la UGPP.

2. ANTECEDENTES

En ejercicio del proceso ejecutivo, la señora Leda Betty Sierra Becerra solicitó² librar mandamiento de pago en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP por la sumas de: i) \$106.258.736,61, por concepto de retroactividad de las mesadas pensionales indexadas desde el 01 de abril de 2005 al 02 de agosto de 2009 y ii) 34.311.402, por concepto de intereses moratorios por el no pago oportuno con, corte a septiembre de 2017, derivados de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, notificada por edicto el 08 de octubre de 2014 y confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia nro. 01 del 28 de enero de 2016, notificada por edicto el 11 de febrero de 2016, que quedó ejecutoriada el 18 de febrero de 2016.

Mediante auto nro. 456 del 11 de julio de 2018³, el Juzgadi 18 Administrativo de Cali libró mandamiento de pago a favor de la ejecutante y en contra de la UGPP y ordenó el pago de las sumas de dinero adeudadas que resultaren de la liquidación de las referidas sentencias, en la proporción que le corresponde a la demandante.

2.1. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 378 del 07 de junio de 2019⁴, el Juzgado 18 Administrativo de Cali declaró probada de oficio la excepción de “inexistencia del título

¹ Ver folios 212-215

² Ver folios 4-6

³ Ver folios 126-128

⁴ Ver folios 212-215



RADICACIÓN : 2017-00208-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : LEDA BETTY SIERRA BECERRA
Demandado : UGPP

ejecutivo” y, en consecuencia, dio por terminado el proceso ejecutivo instaurado por la señora Leda Betty Sierra Becerra. Ordenó, además, el levantamiento de las medidas cautelares decretadas mediante auto nro. 456 del 11 de junio de 2018, adicionado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a través de auto nro. 710 del 22 de noviembre de 2018.

Los argumentos expuestos fueron los siguientes:

Que, revisado el sistema siglo XXI, advirtió que la señora Dora Alicia Quintero Lozano, beneficiaria del 50% de la pensión de sobrevivientes reconocida mediante la sentencia que aquí se ejecuta, adelanta el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho en contra de la UGPP, para obtener la nulidad de la Resolución nro. RDP 002539 del 26 de enero de 2017⁵, que modificó la Resolución nro. RDP 023861 del 27 de junio de 2016⁶ por la que se dio cumplimiento a la sentencia judicial que sirve de título ejecutivo en este proceso.

Que la demanda está en el Juzgado 13 Administrativo Oral de Cali que, por auto nro. 286 del 11 de abril de 2018, rechazó el medio de control por considerar que los actos demandados eran de ejecución y, por lo tanto, no eran susceptible de control judicial. Esa providencia fue recurrida por la parte actora y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto nro. 79 del 08 de febrero de 2019, revocó la providencia ordenó admitir la demanda.

Para terminar el proceso, la primera instancia dijo que los actos administrativos que integran subsidiariamente el título ejecutivo están demandados en el Juzgado 13 Administrativo Oral de Cali y, en ese sentido, esa demanda resulta vinculante en esta sede, toda vez que el hecho de discutirse la legalidad de los actos que componen el título ejecutivo, enerva la exigibilidad del título ejecutivo. A juicio del juzgado, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la señora Dora Alicia Quintero Lozano imposibilita la continuación del proceso ejecutivo, porque evidencia el incumplimiento de los atributos esenciales del título para que adquiera la condición de ejecutable a través del proceso ejecutivo.

Dijo que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control promovido por la señora Dora Alicia Quintero Lozano le impone tomar las medidas pertinentes para evitar el desgaste del aparato judicial y la emisión de sentencias inhibitorias o contradictorias sobre un mismo asunto, pues no puede pasar por alto la decisión del superior en un caso íntimamente ligado al de su conocimiento, que hace que no exista una obligación clara expresa y exigible.

Precisó también, que suspender el proceso por prejudicialidad atentaría contra los principios de celeridad y economía procesal, toda vez que implicaría someter a la demandante Leda Betty Sierra Becerra a la definición de un trámite en el cual no es parte y que no se extiende automáticamente a ella.

⁵ Ver folios 86-92

⁶ Ver folios 73-80



2.2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

La apoderada judicial de la parte demandante, presentó recurso de apelación⁷ contra la decisión tomada por el Juzgado 18 Administrativo Oral de Cali. Dijo lo siguiente:

1. El título ejecutivo base de la ejecución en el presente proceso lo constituyen las sentencias judiciales proferidas y ejecutoriadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado nro. 76001-33-31-018-2012-00253-99, es decir, la sentencia del 22 de septiembre de 2014 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Cali y la sentencia nro. 01 del 28 de enero de 2016 emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Que esas sentencias contienen la definición de la vigencia de la sustitución pensional de la señora Leda Betty Sierra Becerra, desde el 31 de marzo de 2005, indexación de mesadas pensionales mes a mes desde el 31 de marzo de 2005 hasta su pago efectivo e intereses moratorios. Y que las sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas constituyen obligaciones claras, expresas y exigibles.
2. La declaración de inexistencia de título ejecutivo se fundamentó en lo decidido en el auto nro. 79 del 08 de febrero de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado nro. 76001-3333-013-2018-0039-00 instaurado por la señora Dora Alicia Quintero contra la UGPP, proceso del que no hace parte su representada.
3. Los actos de cumplimiento de las sentencias judiciales emitidos por la UGPP no tienen la capacidad de enervar los contenidos de las sentencias judiciales. Y sería un desgaste del aparato judicial supeditar el cumplimiento de las sentencias a los actos de cumplimiento que emita la entidad, pues eso desconocería la razón del proceso ejecutivo, y obligaría a la parte favorecida a volver a demandar en proceso ordinario casos cuyas pretensiones ya fueron definidas. En conclusión, no se puede reabrir el debate definido mediante sentencia judicial, pues los actos de cumplimiento son elementos subsidiarios del título ejecutivo que no tienen el alcance de anular el contenido vinculante y obligatorio de las sentencias judiciales ejecutoriadas, las que reitera son la base de ejecución dentro del presente proceso ejecutivo.
4. Finalmente, adujo que no existe en el presente proceso ejecutivo vicios de legalidad que conlleven a tomar medidas de saneamiento, ni a declarar la inexistencia del título ejecutivo, cuando el mismo auto que se recurre está reconociendo que el título lo constituyen la sentencia del 22 de septiembre de 2012 proferida por el Juzgado Primero de Descongestión de Cali y la sentencia nro. 01 del 28 de enero de 2016 emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. De ese modo, decir que el título de recaudo perdió exigibilidad

⁷ Ver folios 218-224

RADICACIÓN : 2017-00208-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : LEDA BETTY SIERRA BECERRA
Demandado : UGPP



constituye una vía de hecho y una violación al principio de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que es necesario restablecer el equilibrio procesal y revocar la decisión para que el proceso ejecutivo siga su curso.

CONSIDERACIONES:

1. COMPETENCIA

El artículo 243 del CPACA dispone que el auto que pone fin al proceso es susceptible del recurso de apelación, siendo competente en segunda instancia el Tribunal para desatar el mismo. La norma en comento señala lo siguiente:

Art. 243.- Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

(...)

3. El que ponga fin al proceso.

2. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae en determinar si la decisión de declarar de oficio la excepción de “inexistencia de título”, por existir un proceso ordinario contra los actos administrativos de ejecución de sentencia judicial, fue acertada o no.

3. TESIS DEL DESPACHO

El Despacho revocará la decisión apelada porque es clara la existencia del título ejecutivo, que está conformado por la sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, junto con las resoluciones nros. RDP 023861 del 27 de junio de 2016 y RDP 002539 del 26 de enero de 2017.

4. REQUISITOS DEL TÍTULO EJECUTIVO:

La finalidad del proceso ejecutivo tiene su fundamento en la efectividad del derecho que tiene el ejecutante de reclamar del ejecutado el cumplimiento de una obligación clara, expresa y exigible.

El artículo 422 del Código General del Proceso establece:

Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.” (Negrilla de la Sala)



RADICACIÓN : 2017-00208-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : LEDA BETTY SIERRA BECERRA
Demandado : UGPP

De conformidad con el artículo transcrito, es claro que son demandables en proceso ejecutivo las obligaciones claras, expresas y exigibles que emanen de una sentencia de condena, sin embargo, antes de proceder a analizar este aspecto, se deben hacer algunas precisiones:

El título ejecutivo debe reunir requisitos formales y de fondo. Los primeros tienen que ver con que se trate de documento o documentos que conformen unidad jurídica, que sea o sean auténticos, y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. Los requisitos de fondo se refieren a que de los documentos aparezca, a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, una "obligación clara, expresa y exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero.

La doctrina ha dicho que *«por **expresa** debe entenderse cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título. En el documento que la contiene debe ser nítido el crédito - deuda que allí aparece; tiene que estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones. "Faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógico jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta»*⁸.

La obligación es **clara** cuando además de expresa aparece determinada en el título. Debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido.

La obligación es **exigible** cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición. Sobre este concepto, el Consejo de Estado⁹ ha dispuesto:

La última cualidad para que la obligación sea ejecutable es la de que sea exigible es decir cuando pueda demandarse su cumplimiento por no estar pendiente de un plazo o condición. Dicho de otro modo la exigibilidad de la obligación se debe, a la que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido, o cuando ocurriera una condición ya acontecida, o para la cual no se señaló término pero cuyo cumplimiento solo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, y la que es pura y simple por no haberse sometido a un plazo ni condición, previo requerimiento:

El título ejecutivo en materia contencioso administrativa se encuentra determinado en el artículo 297 del CPACA en la siguiente forma:

ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

⁸ Morales Molina, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. El proceso Civil. Tomo II.

⁹ Sección Tercera, sentencia del 10 de abril de 2003, Expediente 23.589, CP, María Elena Giraldo Gómez.



RADICACIÓN : 2017-00208-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : LEDA BETTY SIERRA BECERRA
Demandado : UGPP

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.”(subrayado fuera del texto).

Ahora bien, por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla.

Sobre el particular, el Consejo de Estado¹⁰ expuso:

En cuanto a los procesos ejecutivos iniciados con base en providencias judiciales, es importante traer a colación, por lo pertinente, el auto de la Sección Tercera de esta Corporación del 27 de mayo de 1998, que dijo: "... con respecto a los procesos de ejecución en los cuales el título correspondiente se integra con la decisión o decisiones judiciales y con el acto administrativo de cumplimiento, se pueden presentar estas situaciones: primero, que el título de ejecución lo integren la sentencia y el acto de cumplimiento ceñido rigurosamente a la decisión judicial, en cuyo caso ninguna duda cabe sobre su mérito ejecutivo; segundo, que el título aducido se componga de la providencia judicial y del acto administrativo no satisfactorio de la decisión del Juez, evento en el cual el título también presta mérito de ejecución; tercero, que el título lo integren la sentencia condenatoria y el acto de cumplimiento que se aparta parcialmente de la obligación allí contenida, en cuyo caso también presta mérito ejecutivo, y cuarto, bien podría suceder que el título lo integren la sentencia de condena y el acto de cumplimiento, pero que éste desborde o exceda la obligación señalada en el fallo, en cuyo caso el Juez tendría facultad para ordenar el mandamiento ejecutivo, solamente, desde luego, hasta el límite obligacional impuesto en la sentencia. Se deduce de lo anterior que en materia de títulos complejos integrados por la sentencia y el respectivo acto de cumplimiento, el juzgador conserva poder de interpretación del título en orden a librar el mandamiento de pago con estricta sujeción a la sentencia, todo ello para favorecer el principio de la salvaguarda del interés general y de la cosa juzgada. En el caso examinado, entonces, la decisión judicial acompañada del acto de cumplimiento acorde con la sentencia, presta mérito ejecutivo. No podía ser de otra manera, porque la idea de que los actos administrativos de ejecución o cumplimiento de fallos judiciales vuelvan a ser demandados ante esta jurisdicción por violar o

¹⁰ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "B", sentencia del 28 de julio de 2014 proceso nro. 11001-03-25-000-2014-00809-00(2507-14).



RADICACIÓN : 2017-00208-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : LEDA BETTY SIERRA BECERRA
Demandado : UGPP

incumplir los fallos que dicen cumplir, como lo sugiere el a quo, genera un círculo vicioso, irrazonable por lo mismo, y francamente atentatorio de la cosa juzgada, y de la eficacia de la justicia. Excepcionalmente se podrían admitir acciones de nulidad contra esos actos, si diciendo cumplir el fallo, crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas no relacionadas o independientes del fallo, pues en tal caso se estaría frente a un nuevo acto administrativo, y no frente a uno de mera ejecución de sentencias." Como se ve, los procesos ejecutivos cuyo título de recaudo sea una providencia judicial pueden iniciarse porque la entidad pública no acató la decisión judicial o lo hizo, pero de manera parcial o porque se excedió en la obligación impuesta en la providencia. En ese panorama, al juez que conoce del proceso ejecutivo le corresponderá, primero, verificar si existe título ejecutivo y si está debidamente integrado. Luego, deberá examinar si el título contiene una obligación clara expresa y exigible a cargo de una entidad pública y si la obligación consiste en una prestación de dar, hacer o no hacer. En otras palabras: el juez tiene plena facultad para examinar no sólo los requisitos formales, sino las exigencias que están relacionadas con las condiciones de certeza, exigibilidad, claridad y legalidad del título ejecutivo (requisitos sustanciales). El ejercicio de esa facultad cobra mayor importancia cuando se trata de un título ejecutivo complejo, por cuanto el juez debe revisar cada uno de los documentos que lo conforman para determinar si la parte ejecutada incumplió la obligación (...).

5. DE LAS EXCEPCIONES EN EL PROCESO EJECUTIVO

El artículo 442 del CGP señala lo siguiente respecto a las excepciones en el proceso ejecutivo:

ARTÍCULO 442. EXCEPCIONES. La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:

1. Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo el demandado podrá proponer excepciones de mérito. Deberá expresar los hechos en que se funden las excepciones propuestas y acompañar las pruebas relacionadas con ellas.
2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.
(...)

De lo anterior se concluye que cuando el título ejecutivo esté constituido por una sentencia, las únicas excepciones que pueden proponerse son las taxativamente previstas en el numeral segundo. El Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia¹¹ ha señalado que resulta admisible la declaración de excepciones de oficio en casos en los que: i) se evidencia un flagrante desconocimiento de las normas de orden público, ii) una caducidad no advertida desde el inicio, iii) falta de requisitos de existencia o validez del título y iv) un hecho nuevo capaz de enervar la pretensión ejecutiva —que afecte la

¹¹ Subsección C, Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, providencias del 08 de noviembre de 2016, radicación número: 41001-23-33-000-2013-00112-01(52779), Actor: Luis Guillermo de Ávila Osorio, Demandado: Registraría Nacional Del Estado Civil; También providencia del 10 de noviembre de 2016, dentro del proceso con Radicación número: 25000-23-26-000-2006- 01379-02(56950), Actor: Nación - Ministerio de Transporte; providencia del 27 de noviembre del 2017, radicación número: 13001-23-31-000-2005-01876-02(42337), actor: concesiones y construcciones limitada.



RADICACIÓN : 2017-00208-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : LEDA BETTY SIERRA BECERRA
Demandado : UGPP

calidad del título—. De tal forma que se trata de manera excepcional de aquellos casos en que la ley no prevé como excepciones pasibles de dar fin al proceso ejecutivo, pero que resultan de tanta relevancia que requieren ser declarados por el juez, una vez lo advierta.

6. DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEFINITIVOS Y DE LOS DE EJECUCIÓN

Los actos administrativos, según su contenido, se pueden catalogar en: i) actos de trámite; ii) actos definitivos o principales y actos de ejecución.

Los actos de trámite son aquellas decisiones que la administración adopta para tomar una decisión final o definitiva sobre el fondo de un asunto en particular; los definitivos se caracterizan por decidir directa o indirectamente el fondo de asunto o hacen imposible continuar con la actuación administrativa y los actos de ejecución se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa¹².

Los actos susceptibles de control judicial son los actos definitivos, los cuales contienen una decisión unilateral de la administración que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas subjetivas. Por el contrario, aquellos que impulsan la actuación o se limitan a dar cumplimiento a una decisión, no son controvertibles en vía judicial¹³.

Específicamente, sobre los actos de ejecución, el Consejo de Estado ha dicho¹⁴:

La resolución transcrita (2894 del 14 de septiembre de 2009) que ordenó el reintegro del actor fue expedida para dar cumplimiento a una sentencia de tutela dictada por la Corte Constitucional, es decir, que en principio es un acto de ejecución, tal como lo calificó el Tribunal, pues jurídicamente todo acto que se limite a ordenar el cumplimiento de una sentencia tiene tal connotación. No obstante lo anterior, esta corporación ha aceptado una excepción consistente en que si bien los actos administrativos de ejecución no son demandables, si la administración al proferirlo se aparta del verdadero alcance de la decisión o de las súplicas del actor, que para el caso sería aparte del reintegro, el pago de las sumas que por concepto de salarios y prestaciones dejó de percibir desde el retiro hasta su reintegro, agregándole o suprimiéndole algo, resulta incuestionable que el acto no es de simple ejecución como quiera que nace a la vida jurídica un nuevo acto administrativo que sería a todas luces controvertible ante la jurisdicción.

En conclusión, por regla general, los actos administrativos de ejecución no son demandables. Si la administración al expedirlo se aparta del alcance de la decisión y agrega o suprime algo, pierde su naturaleza y nace a la vida jurídica una nueva decisión que si es controvertible ante el juez contencioso administrativo.

¹² Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A" auto de 16 de marzo de 2017 radicación número: 20001-23-33-000-2014-00121-01(4288-14). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, auto del 15 de abril de 2010, radicación: 52001-23- 31-000-2008-00014-01(1051- 08).

¹⁴ Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A Consejero Ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón, abril 7 del 2011 radicación número: 25000-23-25-000-2010-00152-01(1495-2010) Actor: Severo Acosta Tarazona Demandado: La Nación — Ministerio del Interior y de Justicia.



RADICACIÓN : 2017-00208-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : LEDA BETTY SIERRA BECERRA
Demandado : UGPP

7. CASO CONCRETO

En el presente caso, en auto nro. 456 del 11 de julio de 2018¹⁵, el Juzgado 18 Administrativo Oral de Cali libró mandamiento de pago a favor de la ejecutante y en contra de la UGPP y ordenó el pago de las sumas de dinero adeudadas que resultaren de la liquidación de la sentencia del 22 de septiembre de 2014, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali, confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 28 de enero de 2016, en la proporción que le correspondía a la señora Leda Betty Sierra Becerra en las referidas sentencias.

La parte ejecutada propuso excepciones de pago de la obligación demandada, improcedencia del cobro de intereses de mora durante el periodo de liquidación de CAJANAL y prescripción¹⁶. Frente a las excepciones propuestas, el juzgado estimó que no prosperaban y ordenó la continuación del proceso.

Cuando el proceso se encontraba con programación de fecha para la celebración de la audiencia inicial, la juez de primera instancia solicitó al Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Cali copia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado nro. 76001-33-33-013-2018-00039-00, en el cual es parte la señora Dora Alicia Quintero Lozano, quien es beneficiaria del 50% de la pensión de sobrevivientes reconocida mediante las sentencias base del título ejecutivo, de la que forman parte la Resolución nro. RDP 002539 del 26 de enero de 2017 a través de la cual modificó la Resolución nro. RDP 023861 del 27 de junio de 2016 por la que se dio cumplimiento a la sentencia judicial que sirve de título ejecutivo en este proceso.

Manifestó que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido en el despacho homologa resulta vinculante al proceso ejecutivo, pues al discutirse la legalidad de los actos que lo componen, enerva la exigibilidad del título ejecutivo. A su juicio, imposibilita la continuación del proceso ejecutivo por cuanto pone en evidencia el incumplimiento de los atributos esenciales del título para que adquiera la condición de ejecutable a través del proceso ejecutivo.

Por su parte, la ejecutante en el recurso de apelación indicó: (i) que el título ejecutivo base de la ejecución en el presente proceso lo constituyen las sentencias judiciales proferidas y ejecutoriadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado nro. 76001-33-31-018-2012-00253-99, es decir, la sentencia del 22 de septiembre de 2014 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de Cali y la sentencia nro. 01 del 28 de enero de 2016 emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca; (ii) que su representada no hace parte del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado nro. 76001-3333-013-2018-0039-00 instaurado por la señora Dora Alicia Quintero contra la UGPP, y (iii) que los actos de cumplimiento parten de lo ordenado en las sentencias judiciales ejecutoriadas.

¹⁵ Ver folios 126-128

¹⁶ Ver folios 177-181

RADICACIÓN : 2017-00208-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : LEDA BETTY SIERRA BECERRA
Demandado : UGPP



En el caso *sub examine*, revisados los documentos presentados dentro de la acción ejecutiva —la sentencia judicial del 22 de septiembre de 2014 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, la sentencia nro. 01 del 28 de enero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la Resolución nro. RDP 023861 del 27 de junio de 2016, por la cual se reconoce una pensión de sobrevivientes en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Resolución nro. RDP 002539 del 26 de enero de 2017 que modificó la resolución anterior—, la Sala no comparte el criterio de la *a quo* al declarar la inexistencia del título ejecutivo porque contra las resoluciones nro. RDP 023861 del 27 de junio de 2016 y RDP 002539 del 26 de enero de 2017 se adelante un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por parte de la señora Dora Alicia Quintero Lozano, en el que cabe decir, y le asiste razón a la apelante, no hace parte la ejecutante.

Si bien es cierto la Resolución nro. RDP 002539 del 26 de enero de 2017 se aparta de lo resuelto en la sentencia de primera y segunda instancia proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado nro. 76-001-33-31-018-2012-00253-00 y ordena la prescripción de algunas mesadas pensionales, por lo que fue demandado en Nulidad y Restablecimiento del Derecho, eso no implica que las sentencias no se puedan demandar ejecutivamente, precisamente para cobrar la totalidad de la obligación a la que fue condenada la entidad.

De hecho, la UGPP dio cumplimiento a lo ordenado en la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2014 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia nro. 01 del 28 de enero de 2016, al emitir la resolución por la que reconoce una pensión de sobrevivientes en cumplimiento de un fallo judicial (RDP 023861 del 27 de junio de 2016), aunque posteriormente haya sido modificada por la Resolución nro. RDP 002539 del 26 de enero de 2017, y es por esta razón, se reitera, que la parte demandante acudió a la acción ejecutiva.

Como se sabe, en los procesos ejecutivos cuyo título de recaudo es una sentencia, el título correspondiente se integra con la decisión o decisiones judiciales y con el acto administrativo de cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la sentencia del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali, confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, junto con las resoluciones nros. RDP 023861 del 27 de junio de 2016 y RDP 002539 del 26 de enero de 2017, actos expedidos por la UGPP en cumplimiento a los fallos mencionados y que fueron aportados por la demandante para promover este proceso ejecutivo, razón por la cual el título ejecutivo está bien conformado. Aunado a lo anterior, no se advierte ninguno de los casos señalados por el Consejo de Estado para declarar de oficio la excepción de inexistencia del título ejecutivo como, la falta de requisitos de existencia o validez del título o un hecho que afecte la calidad del título, para terminar el proceso ejecutivo.



RADICACIÓN : 2017-00208-01
Medio de control : EJECUTIVO
Demandante : LEDA BETTY SIERRA BECERRA
Demandado : UGPP

Por lo anterior, no prospera la excepción decretada de oficio por la juez de primera instancia y, en ese sentido, se revocará el auto apelado y se ordenará la continuación del proceso.

En consecuencia,

RESUELVE

PRIMERO. – REVOCAR el auto interlocutorio nro. 378 del 07 de junio de 2019 proferido por el Juzgado 18 Administrativo Oral de Cali, mediante el cual declaró probada de oficio la excepción de «inexistencia del título ejecutivo», por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO. - Ejecutoriada la presente providencia envíese el expediente al juzgado de origen para que continúe con el proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Los magistrados,

PATRICIA FEUILLET PALOMARES

LUZ ELENA SIERRA VALENCIA

OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT